Globethics Repository



Uruguay ¿Desintegración neoliberal o proyecto nacional? [Uruguay ¿neoliberal Disintegration or national project?]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Astori, Danilo
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-07 08:01:56
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220595

Nueva Sociedad Nro.114 Julio-Agosto 1991, pp. 6-10

Uruguay ¿Desintegración neoliberal o proyecto nacional?

Astori, Danilo

Danilo Astori: Político y economista uruguayo. Actual senador de la República. Dirigente de la agrupación Frente Amplio. Autor de diversas publicaciones sobre desarrollo y coyuntura de la economía agraria y acerca de la crisis de la deuda externa.

Para los uruguayos hay más de una perspectiva a adoptar para encarar la reflexión sobre el tratado del MERCOSUR. Entre ellas, es preciso destacar, por lo menos, tres. La primera alternativa importante es la de asignar todo el énfasis del análisis a la eventual ampliación de mercados de que dispondría la producción nacional de aquí en adelante. Una segunda opción significa encarar el proceso de integración que nos propone el tratado como un primer paso posible hacia una experiencia más profunda que, respondiendo a las auténticas necesidades del país, tenga en el futuro capacidad para involucrar a otras áreas complementarias con la del comercio, como la producción, la tecnología y el financiamiento. Y hay una tercera, que es la de afrontar este asunto como una oportunidad histórica - la más grande, sin duda, de que hemos dispuesto en muchos años - para comenzar de una vez por todas a transformar la economía uruguaya en un sentido progresista.

Una interrogante fundamental

Sin dejar en absoluto de valorar los dos primeros puntos de vista señalados, pensamos que para nosotros, los uruguayos, el tercero emerge como el ángulo de análisis preferente ya que, entre otras cosas, es capaz de aportarnos una auténtica visión de síntesis sobre el problema. Es que sin cambios internos relevantes, conviene tener claro desde ya que la economía nacional no estará en condiciones de transitar por el camino que el tratado propone emprender.

Si se comparte que éste es el enfoque primordial a adoptar, entonces cabe plantear desde ya los términos fundamentales sobre cuya base se plantea esta verdadera encrucijada que hoy se nos abre: como actitud política esencial ¿dejaremos que esta integración que se nos propone nos cambie al país, o actuaremos deliberada y racionalmente para transformar a Uruguay con miras a la integración?

Ante esta disyuntiva crucial, debemos tener en cuenta ante todo que elegir el primero de esos dos senderos posibles no significa otra cosa que mantener en vigencia, tal cual es, la política económica actual, inaugurada por la dictadura, confirmada en democracia por el gobierno del doctor Sanguinetti, y profundizada - tanto como acelerada - a partir del 1° de marzo de 1990 por la conducción que encabeza el presidente Lacalle.

En estas circunstancias, es nuestra obligación conocer qué país y qué economía nos ha traído dicha política, por cuanto ése es el escenario sobre el que tendríamos que esperar los efectos de una integración comercial con eliminación arancelaria.

Los problemas del Uruguay

En primer lugar, es éste un país en el que la inversión productiva ha caído estructuralmente a niveles absolutamente insuficientes respecto a las necesidades de renovación tecnológica y de crecimiento sostenido. Con una producción cuyo valor se puede estimar en aproximadamente 8.500 millones de dólares al año, tener una inversión privada de alrededor de 500 millones anuales y una de origen público que se sitúa hoy en torno a los 300 millones, pero que además viene declinando aceleradamente, no resulta bastante ni siquiera para reponer el capital que periódicamente debe quedar fuera de uso por desgaste físico u obsolescencia tecnológica. Uruguay, entonces, se está descapitalizando o, lo que es lo mismo, está perdiendo capacidad material de producción. Si esto es gravísimo en un país que no encara una experiencia de integración, podemos imaginarnos el carácter que adquiere en una economía débil que se apresta a iniciarla.

En segundo lugar, la situación en que se encuentra el aparato productivo está - como es lógico - estrechamente asociada con su ya endémica incapacidad para generar empleo suficiente, y con la larga trayectoria de deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Con sus repercusiones negativas sobre las pasividades, estas tendencias han comprimido aún más la congénitamente pequeña dimensión del mercado interno, impidiendo a este último actuar, al menos, como un estímulo inicial a la reactivación productiva.

La insuficiencia de la inversión productiva está completamente atada a la rentabilidad superior que ofrece el sistema financiero, destino principal de la mayor parte de la riqueza excedente que se genera en el país. Y esta es una tercera categoría de relevantes problemas económicos nacionales. Su principal rasgo negativo no radica en tener depósitos bancarios por un valor de 4.000 millones de dólares, más una

circulación de bonos de deuda pública que alcanza alrededor de 1.800 millones, todo lo cual contrasta abiertamente con una producción anual de 8.500 millones. Lo más grave es, en cambio, que este destino financiero continúa siendo claramente más rentable que el de generar empleo y crecimiento.

En cuarto lugar, el endeudamiento externo sigue constituyendo un formidable obstáculo para el desarrollo productivo. Como directa consecuencia de las renegociaciones realizadas, no sólo se ha dedicado un enorme volumen de recursos al servicio de esos compromisos, sino que se ha asegurado que dicho servicio seguirá absorbiendo, en el futuro, fondos y reservas que naturalmente se detraen de otros fines directamente emparentados con el progreso económico y social del Uruguay. Basta señalar que el país debe hoy cerca de 7.000 millones de dólares y paga aproximadamente 500 millones anuales por concepto de intereses, cifra que supera a la inversión privada y resulta más del 80 por ciento superior a la inversión pública.

Finalmente, pocas líneas se necesitan para decir que todo el panorama reseñado ha desembocado inevitablemente en un perjuicio también prolongado y acumulativo - para la calidad de vida de los hombres y las mujeres de esta tierra. El hecho de que dicha calidad siga integrando los tramos superiores de la escala latinoamericana no puede servir de coartada para el autoengaño. La verdadera comparación a realizar desde este punto de vista no es con los demás, y ni siquiera con los vecinos en particular. Es con nuestra propia historia, con las condiciones esenciales de vida en el pasado, sin necesidad de retrotraernos mucho en el tiempo.

La actitud del gobierno

Si éstos son los problemas centrales que exhiben la economía y la sociedad uruguayas en el presente, cabe constatar ahora que la actual conducción que se ejerce desde el gobierno no sólo no ha encarado su separación, sino que en una gran medida los ha agravado. Así, no ha puesto en práctica un solo instrumento selectivo de estímulo a la inversión productiva, la renovación tecnológica y el crecimiento. Todos los afanes del gobierno se han concentrado en el abatimiento del gasto y el déficit públicos, sólo que en este terreno si aplicando una clara y negativa selectividad de hecho, ya que esas metas se han perseguido castigando especialmente a la inversión y los salarios. Adicionalmente, se renegoció recientemente la deuda externa aceptando condiciones que significan la renuncia anticipada al logro de mejores resultados para el país.

Los efectos de esta postura de gobierno no han sido muy negativos. Pero lo que nos preocupa hondamente ahora es lo que pasaría en este Uruguay si asumimos una postura pasiva ante los acuerdos contenidos en el tratado del MERCOSUR, y nos dirigimos hacia su vigencia dejando a la producción nacional librada a su propia suerte.

En nuestro sector agropecuario, cabe esperar la desaparición lisa y llana de una enorme cantidad de productores de pequeña y mediana dimensión, particularmente dedicados a las actividades hortícolas y granjeras, por la sencilla razón de que no estarán en condiciones de competir con la producción de esta naturaleza proveniente de la provincia de Buenos Aires, basada en un recurso natural de mayor calidad y productividad que el nuestro, y una localización que le permite desplazar sin problemas a cualquier productor nacional.

En determinadas áreas del país, las producciones de soja y arroz - en buena medida ya extranjerizadas - tendrán serios problemas en la competencia con las originarias de Brasil. Por otra parte, y en la medida en que no ha resuelto sus graves problemas financieros y de endeudamiento, la industria frigorífica puede sufrir también alteraciones relevantes. En viejos y dolorosos tiempos - como aquel que, a la salida de la Guerra Grande, fue testigo de un ruinoso tratado comercial con el Brasil, firmado en 1851 - el campo uruguayo constituyó el espacio de engorde de un ganado que se procesaba en Brasil. A fines del siglo XX podría volver a ocurrir lo mismo, y si así fuera, tendríamos un ilustrativo ejemplo de «modernización» neoliberal, consistente en recorrer a contramano largos tramos del camino de la historia.

En síntesis, la concentración de la propiedad, tenencia y explotación de la tierra, se tornarían más agudas de lo que ya son, y ello se vería acompañado por una notoria declinación de las posibilidades de tener una agroindustria nacional. En cuanto a la industria considerada en su conjunto, no hay rama en la que podamos considerarnos exentos de problemas. Para decirlo de otra manera, y salvo contadísimas excepciones, no existe posibilidad alguna de competencia con la producción brasileña, y en menor medida, con la Argentina.

Los servicios como proyecto

Uruguay puede - se dice - convertirse en un vendedor especializado de servicios. No tenemos nada en contra de esta venta y desde ya expresamos nuestro deseo de que el país pueda avanzar por este camino. Pero no podemos dejar de marcar con

énfasis la modestia de este destino en cuanto a posibilidades de inversión, generación y reproducción de riqueza, así como creación de empleo productivo.

Por otra parte, tampoco hay que olvidar que en este proyecto de vender servicios hay un peligro especial que está latente, y es el de terminar, definitivamente, de convertir a nuestro sistema bancario - a partir de un secreto que no tiene vigencia en los demás países que participan en esta experiencia de integración - en un verdadero receptáculo de residuos, que incluye desde fondos que burlan las estructuras normativas de sus países de origen, hasta recursos obtenidos por medio de actividades que más vale no mentar.

Para hacer esto, además de producir alimentos y materias primas en estado natural, e importar y vender productos industriales, sobran los tres millones de habitantes que tenemos. De esta manera, si eligiéramos el ingreso pasivo a este proceso de integración comercial que se nos propone, el Uruguay seguiría vaciándose de jóvenes y, por lo tanto, envejeciendo. Al mismo tiempo, perdería progresivamente la capacidad de decisión como país. Ello se explicaría fundamentalmente por el deterioro de nuestra participación en lo que es siempre el núcleo fundamental de toda actividad económica: la elaboración industrial. Quedando progresivamente separado de esta última, el Uruguay pierde incidencia en aspectos tan relevantes como la inversión, su orientación, las tecnologías a utilizar, los tipos de empleo a promover, el contenido de las tareas de formación y capacitación de trabajadores a llevar adelante, y así sucesivamente. A contar de estos puntos de partida, no cuesta mucho intuir que también se perderá capacidad nacional de decisión en el terreno de la educación y - desde luego - en el más amplio y esencial de la cultura.

En suma, la opción de dejar aquí dentro todo como está hoy, y caminar hacia el MERCOSUR sin intentar un sólo gesto de cambio, es como renunciar a elegir el futuro, entregando sumisamente al Uruguay para que otros nos lo hagan, con el agravante de que ese país hecho por otros será malo en cualquier caso.

El desafío y sus exigencias

Aceptar el desafío de plantarnos ante la profunda conmoción que para la escena nacional supone la operación del tratado de Asunción, nos permite disponer de una oportunidad incomparable para remover los cimientos mismos de una estructura socio-política que hasta el presente existió y funcionó para frenar la transformación del Uruguay en un sentido progresista.

Remover esos cimientos significa, ante todo, la generación de nuevos vínculos sociales, sobre la base de objetivos inequívocamente identificados con el interés nacional que, frustrado hasta ahora por los inflexibles límites derivados de la propia conformación del país, encuentra en las posibilidades de proyección hacia el exterior, el sendero de realización imprescindible para posibilitar el crecimiento sostenido, la renovación tecnológica, la creación de empleo productivo en una magnitud muy superior a la históricamente predominante, y la mejora en las condiciones básicas de vida de la población. Y en ese interés no sólo están comprometidos directamente los asalariados, sino también los productores rurales que resisten a su descomposición como tales; los empresarios con vocación nacional los profesionales y los técnicos que quieren volcar su formación al servicio de esa vocación los compatriotas que sueñan con la posibilidad de participar en experiencias colectivas de propiedad y explotación de recursos porque saben que es factible y necesario, los estudiantes y los jóvenes que desean dejar de pensar en la emigración como proyecto de vida los educadores que junto a ellos conciben un futuro cultural edificado sobre la base de decisiones que nadie puede tomar por nosotros.

Los nuevos vínculos sociales son los que nunca antes existieron entre todos estos protagonistas, y deben ahora comenzar a entretejerse para fundamentar opciones esenciales ante esta encrucijada verdaderamente fundacional que hoy se presenta en la trayectoria histórica de Uruguay.

Naturalmente, sólo hay un punto posible de partida para el nacimiento de este entretejido: la convicción de que el sendero que viene recorriendo el país desde los tiempos de la dictadura conduce inevitablemente a su destrucción, cuya instancia de remate final se encargaría de proporcionarla, precisamente, el funcionamiento del tratado de Asunción. Por eso, la convocatoria a la conformación de un gran movimiento nacional como el aludido antes, se apoya en una crítica rotunda y definitiva a la conducción neoliberal. Sólo que no podrá ser ni rotunda ni definitiva, si no se prolonga en un auténtico programa político alternativo que, partiendo de las grandes prioridades del país en materia de producción, incluya un conjunto de medidas de fondo o de largo plazo que es preciso encarar de inmediato, así como la puesta en práctica de diversas acciones capaces de generar efectos relativamente rápidos.

Entre las primeras, resulta imprescindible incluir las que refieren a la estructura de la propiedad, tenencia y explotación de la tierra, cada vez más concentrada y excluyente de pequeños y medianos productores que vienen desapareciendo a una velocidad que asusta; una renovación industrial que suponga su relocalización a escala

nacional; el replanteo integral de un sistema financiero que desde hace años viene funcionando en contra de la producción y a favor de la subordinación del país al exterior; la concepción de la política nacional en materia de ciencia y tecnología; la elaboración de criterios tendientes a superar los actuales vacíos que presenta el tratado de Asunción, así como a proponer los pasos futuros a intentar para que dicho tratado constituya el primer paso de una experiencia de integración mucho más profunda» y - de modo que todo lo anterior sea posible - la transformación del Estado, no para desmantelarlo a través de una suicida actitud privatizadora, sino para fortalecerlo, modernizarlo y prepararlo con visitas a su intransferible función de conductor en las nuevas condiciones históricas del país.

Las medidas de corto plazo o efecto más o menos rápido son las que apuntan, clara y directamente, a la adopción de nuevos criterios en el manejo de instrumentos fundamentales de la política económica, como los precios e ingresos, el crédito, la tributación, los mecanismos de comercialización y transporte, el tratamiento de los irresueltos problemas de endeudamiento interno y las nuevas posturas que tendremos que adoptar ante los acreedores del exterior.

En todo esto nos va la vida. Seguramente, la mejor manera de convencernos de ello, pasa por la elaboración de propuestas concretas que en todos los terrenos mencionados nos permitan cambiar por dentro para convertir esta primera oportunidad de integración regional, en el comienzo irreversible de una experiencia de realización nacional.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 114 Julio-Agosto de 1991, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**